



Bestia parda, bestia negra

Posiblemente no hay país en el mundo que haya resuelto satisfactoriamente los problemas de derechos humanos, que, por lo general, dejan como saldo las dictaduras y gobiernos autoritarios. Los golpes, los actos de fuerza o las guerras civiles que están en el origen de estos regímenes nunca son versallescos ni de guante blanco. En España, la tierra del juez Garzón, donde la autocracia franquista duró más de 40 años, los artífices de la transición prefirieron mirar para el lado y no hubo un solo juicio, un solo detenido ni una sola condena en relación con los abusos cometidos durante el período. Durante su paso por Chile hace algunas semanas, Juan Luis Cebrían, el fundador de El País, atribuyó el hecho al temor: "Todos teníamos demasiado temor respecto del desenlace de nuestra transición y nadie quiso someterla a presiones mayores". El tema, entonces, se archivó, aunque es probable que mucho antes de eso la sociedad española haya hecho otro tanto. Quizás el hecho no fue tan arbitrario como parece, porque objetivamente hay una diferencia entre una guerra civil encarnizada y brutal, feroz por ambos lados, como fue la española, y las asimétricas campañas represivas de las dictaduras latinoamericanas contra la insurgencia izquierdista de los años '70.

Durante mucho tiempo se pensó que Sudáfrica había sentado un modelo ejemplar sobre la materia, pero con el tiempo las fórmulas de verdad y reparación que inspiró el gobierno de Mandela se han venido trizando bajo un caudal de descontento. Las reparaciones se siguen demorando y diversas amnistías e inmunidades procesales ensuciaron la escena.



ANDRÉS DIAZ/ARCHIVO



HECTOR SOTO



“ El Presidente, en ese discurso más imponente que emotivo pronunciado la noche del martes, fue en todo caso extremadamente cuidadoso y, a diferencia de Aylwin, que pautó a la Corte Suprema respecto de cómo había que interpretar la amnistía, dejó en claro que eran los tribunales de justicia los llamados a aplicar la ley.

La Argentina de Alfonsín creyó haber zanjado para siempre el problema con una ley de obediencia debida y otra de punto final, que hizo recaer las responsabilidades sólo sobre miembros de las juntas de gobierno que se sucedieron entre 1976 y 1983. Esos mandos, que habían sido condenados, posteriormente fueron indultados por Menem y ahora toda la sociedad argentina está desandando lo andado con la conciencia de haber hecho -obvio- las cosas muy mal. La solución uruguaya también dejó mucha decepción en el camino, porque derechamente se impuso la fórmula del punto final. Pero obra en su favor el que haya sido acordada por referéndum; así las cosas, los votos legitimaron lo que en cualquier otro contexto habría sido impresentable.

Chile, que ha estado operando en este campo con gradualidad, por goteo y muy dentro de lo posible, dará a partir de esta semana nuevos pasos que significan mayor eficacia para la justicia, mayores incentivos para la verdad y mayor amplitud para las reparaciones. Pero como el propio Presidente Lagos lo reconoció esta semana, en un sobrio y meditado mensaje al país, nada de esto terminará aquí. Antes de eso, el ministro Insulza había dicho que iba a ser imposible que todas las partes involucradas quedaran satisfechas. Las violaciones a los derechos humanos, más que una mancha, tienen algo de sustancia viscosa y de gas tóxico que se adhiere, que contamina, que envenena con dolor y desconfianza, con sospechas y rencores, la convivencia pública y el rodaje de las instituciones.

El Presidente parece haber ido esta semana todo lo

más lejos que pudo para responder en términos razonables a los imperativos sociales de verdad y justicia, a las demandas de los familiares de las víctimas y a las expectativas del Ejército, cuyos cuadros actuales quieren concentrarse en lo suyo y consideran injusto tener que seguir cargando con las infamias asociadas a otros mandos y otras épocas. Obviamente, entre las agrupaciones de derechos humanos y entre los oficiales en retiro hay grados de frustración que el resto de los actores -los políticos, la Iglesia, los medios de comunicación, entre otros actores- no comparten. Es lógico que así sea, por lo demás, puesto que las aspiraciones y

“ La propuesta presidencial de derechos humanos por un lado ha despolitizado en alguna medida esta causa y, por el otro, ha instaurado un nuevo clima político en el país. Resta saber cuánto va a durar. Una prueba inminente, la bestia parda, es la conmemoración de los 30 años del golpe”.

objetivos personales no necesariamente tienen que coincidir con el interés social.

El Presidente, en ese discurso más imponente que emotivo pronunciado la noche del martes, fue en todo caso extremadamente cuidadoso y, a diferencia de Aylwin, que pautó a la Corte Suprema respecto de cómo había que interpretar la amnistía, dejó en claro que eran los tribunales de justicia los llamados a aplicar la ley. Este reconocimiento significa entre otras cosas que el Ejecutivo no moverá un dedo a favor o en contra de la vigencia o de la inaplicabilidad de la Ley de Amnis-

tía ni tampoco respecto de la hipótesis del secuestro permanente con que los tribunales han trabajado las causas de detenidos desaparecidos. Así las cosas, al menos en dos de los tres grandes desafíos envueltos en la política gubernamental de derechos humanos -verdad y justicia-, va a ser el Poder Judicial, en especial la Corte Suprema, y no el Ejecutivo, el que diga la última palabra. Desde esta perspectiva, la propuesta presidencial es importante no sólo por lo que contiene; también lo es por lo que no contiene ni quiso contener.

La propuesta presidencial de derechos humanos por un lado ha despolitizado en alguna medida esta causa y, por el otro, ha instaurado un nuevo clima político en el país. Resta saber cuánto va a durar. Una prueba inminente, la bestia parda, es la conmemoración de los 30 años del golpe, que sigue inspirando juicios muy divergentes en la sociedad chilena. Otra, menos dramática pero más trascendente, es que los chilenos nos

pongamos de acuerdo hacia dónde queremos ir. En una semana que registró acoptecimientos francamente regresivos -un paro sin propósitos claros, de la mano de la bestia negra del vandalismo urbano- este desafío es arduo, aunque perfectamente alcanzable en un ambiente de colaboración como el que existió en esta materia y con la altura que le imprimió a su propuesta el Presidente Lagos. Esta semana quedó claro que los chilenos estamos aprendiendo a manejar un poco mejor las cuentas del pasado. Los próximos meses dirán qué tal lo hacemos respecto de los dilemas del futuro.